

Conflictos y violencia en la Latinoamérica rural

CRISTÓBAL KAY

La violencia rural ha sido y sigue siendo un gran problema en las sociedades de América Latina. Este artículo explora las conexiones entre la estructura agraria, las relaciones sociales y la violencia rural. También se discute aquí hasta qué punto las reformas agrarias han contribuido a aumentar o disminuir los conflictos y la violencia en el campo. El ensayo se centra en particular en el movimiento de los campesinos sin tierra (MST) en Brasil, la rebelión de Chiapas en México y los conflictos en Centroamérica, especialmente en Nicaragua y El Salvador.

La violencia rural ha alcanzado cimas insólitas en América Latina durante las últimas décadas, cobrando cientos de miles de víctimas y desplazando por la fuerza a millones de campesinos e indígenas. Este artículo explora las causas de esa violencia y en particular la importancia del tema de la tierra. Factores tales como el régimen político, la globalización, las nuevas tecnologías y las políticas económicas neoliberales tienen una significativa relación con el tipo de conflictos y la violencia rural. Pero su grado de influencia varía en gran medida según las características de la estructura agraria y de las relaciones sociales de producción. Es así que la violencia rural tiene múltiples causas y muchas facetas, pero mi argumento es que los conflictos y la violencia en el campo no pueden resolverse en su esencia si no se hace un esfuerzo para solucionar el problema de la tierra.

La violencia rural ha sido endémica y persistente a lo largo de toda la historia de América Latina, y probablemente su episodio más dramático y violento haya sido la conquista y colonización impuesta por los países ibéricos. El sistema agrario que surgió de esa colonización ha sido una fuente primordial de conflicto y violencia en las zonas rurales. Gran parte del campesinado indígena fue desplazado y confinado a regiones y tierras marginales. El siste-

CRISTÓBAL KAY: profesor e investigador del Instituto de Estudios Sociales (ISS), La Haya; especialista en teorías del desarrollo y en estudios rurales; editor, junto con D. Bryceson y J. Mooij, de *Disappearing Peasants? Rural Labour in Africa, Asia and Latin America*, Intermediate Technology Publications, Londres, 2000.

Palabras clave: violencia rural, propiedad de la tierra, reforma agraria, América Latina.

ma agrario colonial y poscolonial fue extremadamente explotador y opresor, y en esas condiciones los campesinos albergaban graves resentimientos que constituyeron un terreno fértil para los conflictos y la violencia. A continuación voy a examinar el movimiento campesino de los Sin Tierra (MST) en Brasil, la rebelión de Chiapas en México y las guerras civiles en Nicaragua y El Salvador. En la última sección presentaré algunas reflexiones sobre las relaciones entre la estructura del agro, la reforma agraria y la violencia.

El Movimiento de los Sin Tierra

El principal protagonista en el campo brasileño en las últimas décadas ha sido el Movimiento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), que con sus cerca de 500.000 miembros se presenta como el mayor movimiento campesino de Sudamérica. El MST es un grupo combativo y bien organizado, cuya estrategia consiste en ocupar ilegalmente tierras de labrantío no utilizadas. En ese sentido ha encabezado más de 1.000 invasiones de tierras o tomas de fincas demandando su expropiación; por lo general son suelos baldíos dentro de la propiedad de algún terrateniente. Esas acciones no pueden sorprendernos considerando que la desigualdad en la posesión de la tierra es particularmente aguda en Brasil, donde 4% de los hacendados controla 79% de la tierra cultivable; por otra parte, se calcula que hay 2,5 millones de campesinos sin tierras. En estas ocupaciones participa una variedad de gente del campo, principalmente semiproletarios o proletarios rurales tales como jornaleros, ocupantes ilegales, aparceros y arrendatarios. Con sus acciones directas –que incluyen bloqueos de carreteras y tomas de oficinas o locales del instituto estatal para la reforma agraria– los campesinos desposeídos presionaron al Gobierno hasta lograr que se concedieran tierras a más de 120.000 familias entre el comienzo de su movimiento, a mediados de los años 80, y 1994 (Veltmeyer et al., pp. 181, 192). Además, durante su primer mandato (1994-1998) el presidente Fernando Henrique Cardoso asentó 285.000 familias campesinas en terrenos expropiados. Su meta es tener otorgados, para finales de su segundo periodo presidencial en 2003, títulos formales de propiedad a unas 400.000 familias más que hoy habitan en tierras abandonadas por sus antiguos propietarios (*The Economist* N° 8.128, 1996, p. 60).

En esta lucha por la tierra ha habido numerosas víctimas; los terratenientes y sus pistoleros a sueldo actúan impunemente. También han muerto o resultado heridos muchos manifestantes en choques con la policía militarizada. Serrill describe vívidamente una de las mayores confrontaciones entre la policía y los campesinos en su batalla por la tierra, ocurrida en 1996:

Unos 1.500 campesinos del estado norteño de Pará, en la Amazonia brasileña, querían tierras, y estaban lo suficientemente hambrientos, lo suficientemente desesperados, para decidirse a actuar temerariamente con tal de conseguirlas. El 17 de abril bloquearon una carretera en Eldorado de Carajás buscando atención a su demanda de que los dejaran asentarse en tierras cultivables sin uso ubicadas en las cercanías. Para su consternación, el gobierno estatal respondió enviando camiones llenos de policías militares fuertemente armados. Los policías dispararon una andanada de gas lacrimógeno, los campesinos atacaron blandiendo

machetes, azadas, guadañas y unas pocas pistolas. La policía abrió fuego con armas automáticas. El resultado fue la confrontación más sangrienta en los 30 años de historia del movimiento brasileño de reforma agraria. Murieron 19 manifestantes y 40 más resultaron heridos por la rociada de balas de la policía. La escena, filmada por un periodista de la televisión local y difundida repetidamente al día siguiente, dejó pasmado a todo Brasil.

Los líderes del MST están concientes de la necesidad de forjar vínculos y trabar alianzas con las organizaciones urbanas a fin de lograr un mayor apoyo popular para sus objetivos. En ese sentido han desarrollado nexos (no sin tensiones) con la izquierda urbana y el Partido de los Trabajadores (PT), como parte de un proyecto más amplio de transformación social y política. En las últimas elecciones presidenciales de 1998 el MST movilizó bases de respaldo para Luis Inácio «Lula» da Silva, quien alcanzó el segundo lugar en la carrera presidencial. En suma, el MST es el movimiento político más dinámico, creativo, inspirador e influyente en el Brasil actual (Petras 1998).

Las acciones del MST ilustran cómo han resurgido en el mundo contemporáneo las luchas de clase al viejo estilo, aunque con rasgos nuevos. Excepto Argentina, Brasil es el único país en Latinoamérica que para los años 90 no había emprendido todavía ninguna reforma agraria. Esta demora puede explicarse considerando el poder político de los terratenientes, que lograron bloquear todos los intentos anteriores de reforma agraria, y la decisión del Estado de abrir la región amazónica a la colonización, aliviando así algo de la presión de la masa empobrecida de campesinos sin tierras. Esta colonización de la frontera pionera proporcionó una «válvula de seguridad» temporal para mitigar las tensiones sociales en el campo, pues le ofrecía a algunos trabajadores rurales posibilidades de migrar y de tener una vida mejor. Sin embargo, en sí misma la colonización fue un proceso violento, en gran parte por las acciones de los terratenientes y de otros capitalistas, quienes reclamaban la tierra colonizada por los campesinos pioneros (los *posseiro*) como propia y muchas veces los expulsaban a la fuerza, especialmente después de que ya habían desbrozado los terrenos. Ciertos proyectos importantes de desarrollo también terminaron en violencia debido al desplazamiento forzoso de la población y a su impacto negativo en los recursos de subsistencia de los habitantes locales y en el medio ambiente. La falta de una infraestructura institucional en la región de la frontera también hizo que muchas veces se utilizara la violencia para resolver conflictos en lugar de recurrir a los mecanismos legales o administrativos del Estado. Y también se usó la violencia como un medio de control social y en particular para dominar a la mano de obra. De manera que al suavizar la intensificación potencial de los conflictos en la zona de los migrantes, la colonización creó igualmente nuevos conflictos y violencia en la región de la frontera.

En síntesis, la violencia generalizada en el Brasil rural es una expresión de la lucha de los pobres del campo para conseguir tierras y asegurar su supervivencia. En estos términos, la reforma agraria es aún una cuestión fundamental, crucial para abordar la pobreza rural y una de las raíces de la violencia en el sector agrario.

La rebelión de Chiapas

La rebelión campesina de Chiapas dirigida por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) estalló en la escena política el 1° de enero de 1994. Chiapas es la región más al sur y más indígena de México, en la frontera con Guatemala, donde la reforma agraria tuvo menos impacto y los terratenientes siguen siendo el poder dominante. Esta región se caracteriza por la pobreza extrema, la desigualdad y la represión. A diferencia de otras áreas en el país, donde los campesinos obtuvieron tierras gracias a la redistribución después de la Revolución, en Chiapas han ido perdiendo territorios que pasaron a manos de grupos externos dedicados a la cría de ganado y la extracción de madera. En ese contexto, los zapatistas surgieron como un grupo de autodefensa cuyo fin es la supervivencia de los indígenas. Por lo tanto, la rebelión de Chiapas no es solo una lucha por tierras sino también por un proceso de desarrollo y una democracia incluyentes. Como sostiene Burbach,

esta no es una simple revuelta de pueblos indígenas centrados solo en retomar sus tierras y expulsar a los ricos que los explotan. Ni tampoco, como lo demuestran los miles de indígenas que se levantaron en armas el 1° de enero, es un movimiento «foco» en el que unos pocos guerrilleros tratan de incitar al pueblo a apoyarlos. Y no es una lucha tipo Sendero Luminoso en la cual un ejército indígena o campesino se propone destruir todo lo que encuentre en su camino hacia la toma del control absoluto del Estado. ... Lo que distingue al EZLN de sus predecesores es que no está encauzado a tomar el poder en Ciudad de México, ni está pidiendo el socialismo de Estado. Su objetivo es encender un movimiento de amplia base de la sociedad civil en Chiapas y el resto de México que transforme el país de arriba abajo (p. 113).

Además, la de Chiapas es una rebelión contra el neoliberalismo y la globalización, contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan) de México con Estados Unidos y Canadá, y especialmente contra la enmienda del Artículo 27 de la Constitución mexicana (uno de los principales logros del movimiento agrario de 1910-1917), que puso término a la reforma agraria. El fin de la distribución de la tierra y la amenaza que pesa sobre la subsistencia de los campesinos por las importaciones de alimentos baratos de EEUU y Canadá después de la firma del Tlcan, son algunas de las principales razones de esa rebelión (Harvey). Las políticas neoliberales del Gobierno, conforme a las cuales el Estado ha eliminado subsidios, créditos y asistencia técnica y otros servicios para el sector campesino, ponen en peligro el cultivo de maíz y cereales. Y el maíz no es solo importante para la supervivencia económica del campesinado, sino que tiene también un significado cultural y simbólico.

Así, el impacto excluyente de la modernización agrícola en el campesinado mexicano y los temores de que la integración de México al Tlcan lo marginará aún más, fomentan la rebelión de Chiapas. Los campesinos no pueden competir con los grandes y tecnificados productores de maíz y cereal de EEUU a menos que se adopten medidas especiales para su protección y desarrollo. Decididamente, la rebelión de Chiapas ha llegado a simbolizar el nuevo carácter de los movimientos sociales de las zonas rurales de Latinoamérica que

son vanguardia de la lucha contra el neoliberalismo. Este movimiento trascendental tiene una multiplicidad de causas y de momento es imposible determinar en forma adecuada su significación para la historia de México, puesto que todavía está en evolución y sus ramificaciones van mucho más allá de la cuestión de la tierra. Por ejemplo, González Casanova menciona nueve causas del levantamiento zapatista, entre ellas la crisis de la hacienda tradicional, la carencia de tierras y la pobreza crecientes, la politización de los indígenas y la violencia institucional de los grupos dominantes en Chiapas.

En América Latina el campesinado está contraatacando y sería un grave error descartar estos nuevos movimientos indígenas y campesinos como el último resuello de rebelión. Si conducirán a un resurgimiento de la izquierda, como afirma Petras (1997), es algo que está por verse. Pero sin ninguna duda están configurando nuevas identidades étnicas y de clase en las cuales los protagonistas afirman su propia historia y su capacidad de crear precedentes.

La guerra y la paz en Centroamérica

La cuestión de la tierra no solo fue un factor importante en la historia de la violencia en Centroamérica (o de la relativa falta de violencia en Costa Rica debido a su distribución de la tierra mucho más igualitaria), sino que también desempeñó un papel clave en los acuerdos de paz centroamericanos con los cuales Nicaragua, Guatemala y El Salvador están intentando encontrar una solución a la guerra civil que asolara sus territorios. Unas pocas cifras son útiles para medir la magnitud de esos enfrentamientos. De acuerdo con algunos cálculos, 300.000 personas fueron asesinadas en Guatemala, El Salvador y Nicaragua durante los conflictos, y dos millones (alrededor de 13% del total de la población) fueron desplazadas, obligadas a huir al exterior o a sitios más seguros en sus países. En su mayoría los actos violentos fueron cometidos por fuerzas gubernamentales, y una proporción mucho más pequeña por paramilitares o escuadrones de la muerte y grupos guerrilleros (Pearce 1998, pp. 590-591). En 1986 el entonces presidente de Costa Rica, Oscar Arias, tomó la iniciativa de buscar una solución política a la guerra civil en los países mencionados. Sus esfuerzos fueron recompensados con el acuerdo de Esquipulas II (1987), firmado por varios países y que preparó el camino para el fin de los conflictos armados. Pero los acuerdos de paz definitivos se sancionaron apenas en 1990 en Nicaragua, 1992 en El Salvador y 1996 en Guatemala.

En Nicaragua la propiedad de la tierra estaba concentrada en grado sumo, siendo el mayor terrateniente del país su dictador Anastasio Somoza. La revolución sandinista que lo derrocó en 1979 implementó una reforma agraria radical, expropiando casi la mitad de las tierras agrícolas y beneficiando a más de un tercio del campesinado. Las fincas expropiadas fueron organizadas en haciendas estatales, en algunos casos cooperativas de producción, y solo una pequeña proporción fue distribuida directamente a los beneficiarios como fincas familiares particulares. El gobierno sandinista temía que al sub-

dividir las grandes haciendas se perdieran las economías de escala, y sobre todo que se comprometieran los ingresos de exportación, ya que los campesinos beneficiarios podían pasar de las cosechas para la exportación a las de subsistencia. El énfasis colectivista también se basaba en factores políticos e ideológicos socialistas.

Los terratenientes y otras fuerzas sociales opuestas a la revolución comenzaron a organizar una lucha armada para derrocar el gobierno sandinista, y en el contexto de la Guerra Fría contaron con un fuerte respaldo de EEUU durante la administración Reagan como parte de su lucha contra cualquier movimiento o revolución socialista. Los grupos contrarrevolucionarios («contras») explotaron el descontento de numerosos campesinos con la política agraria sandinista y con el carácter colectivista del sector reformado. El conflicto armado entre los «contras» y el Gobierno desestabilizó gravemente la economía y la producción agrícola.

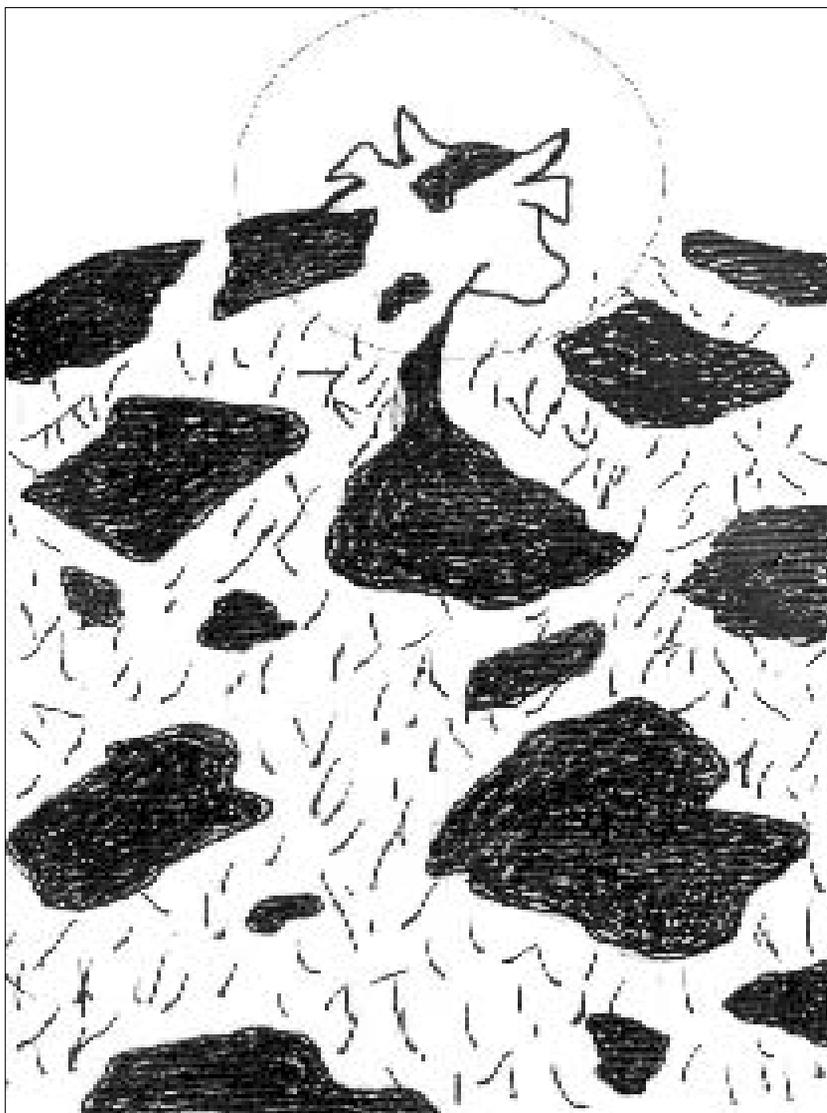
Los campesinos presionaron hasta lograr que se adoptara una reforma agraria menos centrada en el Estado, y después de 1984 algunas empresas reformadas fueron transferidas directamente a beneficiarios campesinos, bien fuera en propiedad cooperativa o individual. Este cambio en la política también fue motivado por el deseo de reducir la influencia de los «contras» entre el campesinado y estimular la producción alimenticia. Después de ello se triplicó la cantidad de tierra expropiada redistribuida a beneficiarios campesinos como propiedad individual, pasando de 8% del total en 1981-1984 a 24% en 1985-1988 (Enríquez, pp. 91-92). Los beneficiarios también consiguieron un acceso más favorable a insumos escasos, modificándose así el trato preferencial que anteriormente se daba a las fincas estatales. Sin embargo, debido a la guerra civil y al deterioro económico resultante, los campesinos todavía enfrentaban una situación difícil. La reforma agraria sandinista también provocó un esfuerzo organizativo importante del campesinado. En 1981 el Gobierno ayudó a establecer una organización nacional de criadores y agricultores denominada Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), que con el tiempo logró conquistar un mayor grado de autonomía del Estado y hasta el día de hoy sigue siendo la organización más importante de su tipo en la zona rural.

A pesar del cambio en la política agraria, los sandinistas no consiguieron el respaldo mayoritario del campesinado; así quedó demostrado con los resultados de las elecciones de 1990, donde solo 36,3% del voto rural fue para el FSLN, el partido de gobierno, en contraste con 44,2% de la votación urbana (Horton, p. 261). Posiblemente el FSLN habría logrado un mejor resultado en las áreas rurales si hubiera repartido títulos de propiedad individuales entre beneficiarios campesinos desde el principio de la reforma agraria, pues eso habría inducido a menos de ellos a apoyar a los «contras». Como escribe Horton:

La gran mayoría de los comandantes y combatientes «contras» eran campesinos del interior montañoso de Nicaragua. ... Es posible que en un momento dado 30.000 nicaragüenses lu-

charan junto con las fuerzas antigubernamentales, lo que hace de los «contras» una de las mayores movilizaciones armadas de campesinos en la historia contemporánea de América Latina.

La guerra civil nicaragüense tuvo costos humanos y económicos devastadores. De una población aproximada de 3,5 millones de personas, 30.865 murieron víctimas de la guerra y más de 350.000, principalmente de las áreas rurales, fueron desplazadas por la contienda (ibíd., p. xi). Esto movió al gobierno sandinista a firmar los acuerdos de paz mediados por el presidente Arias, conjuntamente con otros países centroamericanos. Los acuerdos demandaban



un alto de la ayuda extranjera a los «contras», ofreciendo a cambio la celebración de elecciones democráticas. Al principio ello condujo a un cese del fuego temporario, y tras la derrota del FSLN en las elecciones de 1990 a una interrupción permanente de la confrontación y a la desmovilización de los «contras».

Con la victoria de Violeta Chamorro, el nuevo gobierno procedió a modificar la reforma agraria. La distribución de tierras a ambos bandos de la guerra civil se vio como un elemento clave para la pacificación. Pero aunque esta contrarreforma parcial terminó con la guerra civil, también originó nuevos conflictos y alimentó nuevos brotes de violencia, al causar una situación caótica en el campo por las múltiples reclamaciones de derechos sobre la tierra. Los terratenientes reclamaban tierras expropiadas; los beneficiarios querían subdividir las fincas estatales y colectivas y tener títulos de propiedad privada, así como evitar que los terratenientes y los «contras» obtuvieran tierras del sector reformado; los «contras» estaban demandando terrenos a cambio de sus armas; y los sin tierra, a los que la reforma agraria sandinista había dejado de lado, también querían su parte. Por lo tanto, no resulta sorprendente que comenzaran a surgir esporádicos brotes de violencia en las áreas rurales, especialmente considerando que «para 1995, 47% de toda la tierra de labrantío de la nación no tenía título legal y los antiguos propietarios habían presentado 7.185 demandas sobre 25% del total de terrenos de labor» (Horton, p. 279). La paradoja es que aunque los «contras» habían contribuido a la victoria de las fuerzas antisandinistas, algunos de ellos tomaron las armas de nuevo para luchar por un pedazo de tierra, bien fuera porque el Gobierno no respondía a sus demandas o porque lo hacía con demasiada lentitud. A esos excontras que retomaron las armas se les denomina «recontras»; son los que piensan que solamente a través de la violencia harán que el Gobierno atienda sus demandas (Abu-Lughod).

En El Salvador, en 1932 las extremas desigualdades rurales y las condiciones de explotación desembocaron en una revuelta campesina brutalmente reprimida por las fuerzas armadas y los terratenientes. De acuerdo con algunas estimaciones, de una población que apenas llegaba entonces a un millón de habitantes, fueron asesinadas entre 30.000 y 40.000 personas (aunque otros hablan de 20.000). No es de extrañarse, entonces, que a esa masacre se la recuerde como «la matanza». Los indígenas fueron el principal blanco (Pearce 1996) de esa acción brutal que aseguró el predominio de la oligarquía rural por muchas décadas. Fue apenas en los años 70, cuando los campesinos y jornaleros rurales sintieron que su sustento estaba cada vez más en peligro, que arreciaron de nuevo los conflictos y amenazaron con hundir el país en la guerra civil.

Las investigaciones han demostrado que existe una relación significativa entre los patrones de propiedad de la tierra, las variaciones en el uso de ella y el conflicto sociopolítico (Brockett 1994). La modernización de haciendas y el cambio a las exportaciones del agro desplazaron a muchos campesinos y

también muchos cultivos alimentarios, haciendo subir los precios de los alimentos y volviendo más difícil la supervivencia de los trabajadores del campo y los pequeños agricultores. En marzo de 1980 el Gobierno decretó una reforma agraria para enfrentar la creciente ola de conflictos, para disminuir el apoyo campesino a los grupos revolucionarios y con la esperanza de obtener un mayor respaldo rural para el régimen. Pero tal reforma tropezó muy pronto con la poderosa oposición de los terratenientes, quienes limitaron la eficacia de su puesta en práctica y desataron un periodo de guerra civil que duró hasta 1992 (Paige; Seligson). Las expectativas gubernamentales de que la reforma tendería las bases para una estabilidad social y una paz duraderas se vieron frustradas, pues la oligarquía rural fue capaz de movilizar a sus aliados en las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad contra la conclusión del proceso de expropiación. La alianza de la elite agroexportadora y los militares se tradujo en la represión brutal y a veces indiscriminada del campesinado, lo que llevó a muchos campesinos a la resistencia armada (Stanley).

Con todo, en 1980 la reforma agraria en El Salvador logró distribuir entre un quinto y un cuarto de la tierra a un quinto de la mano de obra rural. Pero no logró ofrecer nada a la gran masa de los sin tierra, pues los beneficiarios fueron más que nada los pequeños arrendatarios de fincas y algunos de sus trabajadores. También se organizaron cooperativas de producción en la mayoría de las haciendas expropiadas, pero alrededor de un quinto de su perímetro se cultivó en forma individual. Solo una pequeña proporción de las haciendas expropiadas fue subdividida y distribuida individualmente a beneficiarios como fincas familiares privadas.

Los 12 años de guerra civil salvadoreña cobraron entre 200.000 y 300.000 vidas (Booth/Walker, p. 156), la inmensa mayoría víctimas de las fuerzas armadas y los escuadrones de la muerte. El tributo de vidas equivalió a alrededor de 15% de la población y la guerra desplazó otro 30% de sus hogares (Brockett 1994, p. 175). No obstante, la reforma agraria debilitó el poder de los terratenientes, abriendo las puertas para las negociaciones de paz (Mason). Con la firma del Acuerdo de Paz en enero de 1992 terminó formalmente la guerra civil, las guerrillas fueron incorporadas al proceso de pacificación y se convirtieron en un partido político. Este proceso de institucionalización fue visto como un medio para disminuir los conflictos o, al menos, para encontrar mecanismos pacíficos para resolverlos y reducir así la violencia. Pero los brotes esporádicos continúan, y no en menor grado debido a la policía y los paramilitares. Además la reforma agraria de 1980 quedó incompleta, pues la segunda etapa nunca se puso en marcha. Incluso existe la posibilidad de que algunos beneficiarios puedan perder sus tierras, ya que no pueden pagar la deuda que surgió de la reforma agraria. La elevada densidad demográfica del país y el desempleo rural, la escasez de tierras y la intensidad de los cultivos con sus consecuencias ecológicas negativas, hace que sea difícil encontrar una solución a la demanda de tierra de los pobres del campo. Además la continua expansión de las exportaciones del agro está causando un mayor desplazamiento de los campesinos, conflictos y violencia. Sin pasar por alto

las dificultades, concuerdo con la conclusión de Pearce (1996, p. 303) de que «solo una reforma agraria ejecutada dentro de un amplio proceso de transformación social radical tiene posibilidades de preparar el camino para la paz y el desarrollo duraderos en El Salvador».

La estructura del agro, la reforma agraria y la violencia

En este artículo he sostenido que el sistema agrario altamente desigual, las relaciones sociales de explotación concomitantes y los procesos excluyentes de modernización son factores importantes, en algunos casos incluso los más prominentes, para explicar los conflictos y la violencia en las áreas rurales de América Latina. El análisis también ha revelado que hay otros factores significativos que influyen en el carácter y la evolución de los conflictos y la violencia en el campo. No existe una respuesta única y simple en cuanto a las causas de la violencia rural, su persistencia o resurgimiento, y las posibles formas de resolverla, si es que se puede. Si bien encontramos algunos factores en común, también hay variaciones que surgen de las peculiaridades estructurales de cada país, así como de las diferentes acciones de los terratenientes, los campesinos, el Estado y otros actores importantes tales como grupos urbanos, partidos políticos y el gobierno estadounidense.

Me he propuesto aquí analizar en particular las relaciones entre la estructura del agro, la reforma agraria y la violencia rural, a fin de examinar la tesis de que una de las mayores causas de conflictos y violencia entre los terratenientes y los campesinos radica en un sistema agrario extremadamente desigual. De esta proposición se desprende que los países que tienen un sistema agrario más igualitario también tienen una sociedad rural menos violenta que la de aquellos con una tenencia de la tierra más polarizada. El Estado juega un papel crucial en el surgimiento, desarrollo y resolución de los conflictos rurales, y por lo tanto los encargados de formular las políticas pueden aprender de experiencias previas, tales como las que se discuten en este ensayo. Si bien el análisis desarrollado aquí ha demostrado que esas proposiciones pueden considerarse válidas en general, las diversas relaciones están lejos de ser directas e inmediatas, debido a una variedad de otros factores participantes. Por ejemplo, los países que han emprendido reformas agrarias muchas veces han experimentado un incremento de los conflictos violentos durante las primeras etapas, aunque después pueden haber alcanzado un mayor grado de estabilidad. Los países donde los conflictos por tierras fueron particularmente intensos generalmente trataron de pacificar las áreas rurales mediante una política de reforma agraria. Y si bien esa reforma puede ser una precondition para una sociedad rural más integrada y estable, la disminución de la violencia en el campo depende en última instancia de una institucionalización exitosa de los conflictos, de manera que los grupos sociales perjudicados puedan plantear sus demandas a través de canales legales y políticos, así como del desarrollo, la solidez y el arraigamiento de instituciones y prácticas democráticas. En suma, la solución de los problemas de la tierra y la violencia es parte integral del proceso de democratización de la sociedad.

Las reformas agrarias no siempre resultaron ser las panaceas imaginadas, debido a que los gobiernos no cumplieron sus promesas: distribuyeron mucha menos tierra de lo que se esperaba, brindaron un apoyo técnico y económico insuficiente al sector reformado, hubo incompetencia administrativa, u otras fallas (Thiesenhusen). De esa forma con frecuencia las reformas agrarias condujeron a más violencia a causa de la frustración del campesinado por el paso lento, el alcance limitado y la implementación jerárquica (de arriba abajo) de los programas de reforma. Sin embargo, aun con mayor frecuencia las demandas campesinas de una reforma agraria tropezaron con la encarnizada resistencia de los terratenientes y la represión del Estado. Y cuando los gobiernos iniciaron alguna distribución de tierras los grandes propietarios muchas veces consiguieron bloquear la reforma, e incluso en algunos casos lograron derrocar el Gobierno y retomar parte o toda su tierra expropiada, a menudo apelando a recursos violentos, ya fuera directamente o contratando pistoleros, usando organizaciones paramilitares o apoyándose en el poder de represión estatal. La cuestión de la tierra ha resultado central en muchos de los conflictos y en los fenómenos de violencia rural, por lo tanto es preciso que los gobiernos la aborden si desean obtener algún grado de estabilidad social y política a largo plazo, aun cuando en los primeros tiempos desencadene más violencia.

Los gobiernos tienen que encarar el asunto de la tierra, pues los «paños calientes» solo pueden empeorar el problema. Así, los países que congelaron las reformas agrarias o que solo pusieron en práctica reformas muy limitadas experimentaron mayor violencia (Colombia, El Salvador, Guatemala y Brasil). En este último país, a pesar del surgimiento del MST, de las crecientes demandas de tierra del campesinado pobre, y de la transición al régimen civil durante la década de los 80, el Gobierno solo ha emprendido una redistribución menor de la tierra. Los terratenientes han podido bloquear cualquier reforma agraria importante debido a las peculiaridades de su sistema político federal, en donde las regiones rurales están sobrerrepresentadas en el Parlamento. Esto les ha dado a los terratenientes una gran influencia en el sistema político nacional, ya que controlan muchos de esos estados rurales. Y por eso las movilizaciones campesinas han experimentado la violencia de los hacendados y de los estados federales. En otros países, la falta de progreso con la reforma agraria ha llevado a la aparición de movimientos guerrilleros que lograron movilizar a los desencantados pobres rurales. Esto ha provocado acciones de contrainsurgencia del Estado, con el apoyo del gobierno de EEUU durante el periodo de la Guerra Fría, a fin de combatir una amenaza, real o imaginaria, de subversión comunista. Tales medidas de contrainsurgencia han sido responsables de la mayoría de las muertes violentas y de los desplazamientos masivos de la población rural en la región centroamericana, alcanzando características casi genocidas contra comunidades étnicas en el caso de Guatemala (Falla; Kruijt). La batalla de la contrainsurgencia en la posguerra fría ha adquirido una nueva dimensión, como se ve en el caso de Colombia, donde las operaciones represivas contra el campesinado fueron emprendidas so pretexto de, o en vinculación con, la guerra contra la mafia de las drogas y la erradicación forzosa de los cultivos de coca mediante acciones militares.

Los países que han implementado reformas agrarias radicales o que han amenazado con hacerlo, como El Salvador, provocaron la ira de los terratenientes y, por lo tanto, no se libraron de la violencia. En Guatemala una reforma agraria popular desembocó en el derrocamiento del gobierno de Jacobo Arbenz en 1954, y en una violenta contrarreforma en donde gran parte de la tierra expropiada volvió a sus previos dueños (Brockett 1988). Sin embargo, ello simplemente agravó y pospuso el problema por una o dos décadas, conduciendo luego a una violencia mucho mayor. En El Salvador la reforma agraria de 1980 llevó a 12 años de guerra civil durante los cuales los campesinos soportaron lo peor de la violencia. Alguna tierra fue distribuida, pero los terratenientes han conseguido obstruir las etapas subsiguientes de la reforma. Es así que la cuestión de la tierra sigue sin resolverse en El Salvador y continúa siendo una fuente potencial de más conflictos y violencia. México es quizás el único caso en América Latina donde la reforma agraria alcanzó importantes metas políticas desde el punto de vista de los intereses de la nueva clase dominante. Por más de siete décadas la reforma agraria y la habilidad del Estado mexicano para incorporar, disuadir y reprimir al campesinado aseguró un gobierno monopartidista y una relativa estabilidad política. Hay que tener en mente, sin embargo, que un factor importante en la conformidad de los campesinos ha sido también la violenta represión de los movimientos campesinos independientes, armados o no, por parte del Estado. Esta estabilidad relativa solo se hizo añicos en 1990 con la rebelión neo-zapatista en Chiapas; por otra parte, como se analizó antes esta región era el eslabón más débil en la reforma agraria mexicana. En 2000, por primera vez desde que el PRI llegó al poder, resultó electo presidente de la República un candidato de la oposición, anunciando otro paso hacia la democratización del país. Esto podría muy bien facilitar una solución del conflicto de Chiapas.

En Nicaragua, a pesar de la popularidad inicial de la revolución y de la extensa reforma agraria, el carácter estatista de la misma alienó a muchos campesinos y limitó la cantidad de beneficiarios. Sin embargo, gran parte de la violencia rural se debió a la guerra de los «contras» contra el gobierno sandinista, con el generoso respaldo de los terratenientes expropiados y del gobierno de EEUU. Los «contras» lograron incorporar a sus filas a muchos de los campesinos insatisfechos con la reforma agraria. Si bien la contrarreforma post-sandinista ha creado nuevas fuentes de conflictos y violencia, el Gobierno espera que la subdivisión de las haciendas colectivas y estatales en fincas familiares, y su distribución a algunos de los anteriores beneficiarios y a los «contras» desmovilizados, podrá finalmente pacificar el campo. Mientras mayor sea el número de campesinos sin tierras que pueda asentarse, mayor será la posibilidad de reducir la violencia rural. Pero hasta ahora la situación es incierta, numerosos terratenientes han reclamado parte de o toda su tierra expropiada, dejando una menor cantidad disponible para la redistribución.

La relevancia de la cuestión de la tierra también se ha manifestado en los acuerdos de paz centroamericanos, en donde la redistribución de tierras fue un ingrediente importante para conseguir la desmovilización de las faccio-

nes en guerra y obtener un cierto grado de estabilidad política. Es significativo observar que Argentina y Costa Rica, con relativamente menos violencia rural, poseen también una estructura agraria mucho más igualitaria y un sector más grande de productores agrícolas de clase media que el resto de los países latinoamericanos. En las luchas campesinas de estos países no se han destacado las demandas de reforma agraria; ellas más bien se han centrado en mejores precios para los productos agrícolas, acceso a más créditos o a créditos más baratos, protección contra la competencia extranjera, rentas más bajas para los arrendatarios, mejores salarios y condiciones laborales, etc. (Edelman).

¿Cuáles son las perspectivas en las condiciones del neoliberalismo? El cambio del proceso de desarrollo centrado en el Estado y dirigido hacia adentro del modelo de mercado neoliberal y orientado a la exportación puso fin a los programas de reforma agraria conducidos por el Estado, y abrió la puerta a las contrarreformas así como a reformas dirigidas por el mercado o negociadas con un principio de «vendedor dispuesto» y «comprador dispuesto» (Zoomers/Van der Haar). El nuevo modelo económico también debilitó el poder de las organizaciones campesinas tradicionales con la drástica caída del empleo rural permanente y el rápido incremento de formas casuales y temporales de trabajo. Los mercados laborales se han vuelto más flexibles, competitivos y dispersos, entorpeciendo el desarrollo de organizaciones y de redes de solidaridad entre los trabajadores rurales. Sin embargo, han surgido nuevos movimientos campesinos e indígenas, como el MST de Brasil y el EZLN de México, que hacen políticamente difícil continuar imponiéndole al campesinado el modelo neoliberal pese a sus consecuencias, y que mantendrán viva la agenda de la reforma agraria. Es posible que los conflictos rurales se vuelvan más violentos que en el pasado, puesto que se ha debilitado la capacidad mediadora e incorporadora del Estado, así como su habilidad (y disposición) para encarar los efectos negativos del actual patrón desigual y excluyente de modernización rural y globalización. Sigue siendo un interrogante si estos nuevos movimientos podrán garantizar que las fuerzas del mercado sean aprovechadas para un proceso de desarrollo participativo, incluyente e igualitario (Kay).

En conclusión, he procurado demostrar que una de las raíces de la violencia rural en América Latina se encuentra en su sistema agrario tan desigual. Un primer paso importante para encarar la violencia rural implica resolver la cuestión de la tierra, de manera que los campesinos pobres y desposeídos puedan acceder a tierras y a recursos económicos suficientes para garantizarles un nivel de vida sostenible y una participación apropiada en la sociedad. Por otra parte, las estrategias de desarrollo y los procesos de modernización tienen que volverse incluyentes, lo cual es difícil de alcanzar dentro del contexto actual de una globalización que tiende a excluir a los pobres del campo. También se necesitan cambios políticos, pues la reforma agraria solo puede ser un primer paso en el proceso de abordar los conflictos y la violencia en la sociedad rural, lo cual, a su vez, requiere una mayor democratización de los sistemas sociales y políticos de América Latina.

Bibliografía

- Abu-Lughod, D.I.: «Failed Buyout: Land Rights for Contra Veterans in Postwar Nicaragua» en *Latin American Perspectives* N° 27 (3), 2000, pp. 32-62.
- Booth, J.A. y T.W. Walker: *Understanding Central America*, Westview Press, Boulder, 1993.
- Brockett, C.D.: *Land, Power, and Poverty: Agrarian Transformations and Political Conflict in Rural Central America*, Unwin Hyman, Boston, 1988.
- Brockett, C.D.: «El Salvador: the Long Journey from Violence to Reconciliation» en *Latin American Research Review* N° 29 (3), 1994, pp. 174-187.
- Burbach, R.: «Roots of the Postmodern Rebellion in Chiapas» en *New Left Review* N° 205, 1994, pp. 113-124.
- Edelman, M.: *Peasants Against Globalization: Rural Social Movements in Costa Rica*, Stanford University Press, Stanford, 1999.
- Enriquez, L.J.: *Harvesting Change: Labor and Agrarian Reform in Nicaragua, 1979-1990*, North Carolina University Press, Chapel Hill, 1991.
- Falla, R.: *Massacres in the Jungle: Ixcán, Guatemala, 1975-1982*, Westview Press, Boulder, 1994.
- González Casanova, P.: «Causes of the Chiapas Rebellion» en *Identities: Global Studies in Culture and Power* N° 3 (1-2), 1996, pp. 269-290.
- Harvey, N.: *The Chiapas Rebellion: The Struggle for Land and Democracy*, Duke University Press, Durham, 1998.
- Horton, L.: *Peasants in Arms: War and Peace in the Mountains of Nicaragua, 1979-1994*, Ohio University Press, Athens, 1998.
- Kay, C.: «Rural Development: from Agrarian Reform to Neoliberalism and Beyond» en R.N. Gwynne y C. Kay (eds.): *Latin America Transformed: Globalization and Modernity*, Oxford University Press / Arnold, Londres-Nueva York, 1999, pp. 272-304.
- Kruijt, D.: «Exercises in State Terrorism: the Counter-Insurgency Campaigns in Guatemala and Peru» en K. Koonings y D. Kruijt: *Societies of Fear: The Legacy of Civil War, Violence and Terror in Latin America*, Zed Books, Londres, 1999.
- Mason, T.D.: «The Civil War in El Salvador: a Retrospective Analysis» en *Latin American Research Review* N° 34 (3), 1999, pp. 179-196.
- Paige, J.M.: «Land Reform and Agrarian Revolution in El Salvador: Comment on Seligson and Diskin» en *Latin American Research Review* N° 31 (2), 1996, pp. 127-139.
- Pearce, J.: *Promised Land: Peasant Rebellion in Chalatenango, El Salvador*, Latin American Bureau, Londres, 1996.
- Pearce, J.: «From Civil War to 'Civil Society': Has the End of the Cold War Brought Peace to Central America?» en *International Affairs* N° 74 (3), 1998, pp. 587-615.
- Petras, J.: «Latin America: the Resurgence of the Left» en *New Left Review* N° 223, 1997, pp. 17-47.
- Petras, J.: *The Left Strikes Back: Class Conflict in Latin America in the Age of Neoliberalism*, Westview Press, Boulder, 1998.
- Seligson, M.A.: «Thirty Years of Transformation of the Agrarian Structure of El Salvador, 1961-1991» en *Latin American Research Review* N° 30 (3), 1995, pp. 43-74.
- Serrill, N.S.: «Of Land and Death» en *Time* N° 147 (19), 6/5/1996, p. 35.
- Stanley, W.: *The Protection Racket State: Elite Politics, Military Extortion, and Civil War in El Salvador*, Temple University Press, Filadelfia, 1996.
- Thiesenhusen, W.C.: *Broken Promises: Agrarian Reform and the Latin American Campesino*, Westview Press, Boulder, 1995.
- Veltmeyer, H., J. Petras y S. Vieux: *Neoliberalism and Class Conflict in Latin America*, Macmillan, Londres, 1997.
- Zoomers, A. y G. van der Haar (eds.): *Current Land Policies in Latin America: Regulating Land Tenure Under Neo-liberalism*, KIT, Amsterdam, 2000.